

No. 44019

**Argentina
and
El Salvador**

Agreement between the Argentine Republic and the Republic of El Salvador on judicial assistance in criminal matters. San Salvador, 12 February 2003

Entry into force: *15 January 2005 by the exchange of instruments of ratification, in accordance with article 27*

Authentic texts: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Argentina, 9 July 2007*

**Argentine
et
El Salvador**

Accord entre la République argentine et la République d'El Salvador relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale. San Salvador, 12 février 2003

Entrée en vigueur : *15 janvier 2005 par échange des instruments de ratification, conformément à l'article 27*

Textes authentiques : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Argentine, 9 juillet 2007*

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

**CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA
EN MATERIA PENAL**

La República Argentina y la República de El Salvador, en adelante denominadas "Las Partes"

CONSIDERANDO los lazos de amistad y cooperación que las unen;

ESTIMANDO que la lucha contra la delincuencia, requiere de la actuación conjunta de los Estados;

RECONOCIENDO que la lucha contra la delincuencia es una responsabilidad compartida de la comunidad Internacional;

CONSCIENTES que es necesario el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación judicial y asistencia mutua, para evitar el incremento de las actividades delictivas;

DESEOSOS de adelantar acciones de control y represión del delito en todas sus manifestaciones, a través de la coordinación de acciones y ejecución de programas concretos;

EN OBSERVANCIA de las normas constitucionales, legales y administrativas de sus Estados, así como el respeto a los principios de Derecho Internacional, en especial de soberanía e integridad territorial, tomando en consideración las recomendaciones de las Naciones Unidas en esta materia,

Han convenido lo siguiente:

**CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1
Ámbito de Aplicación**

1. El presente Convenio tiene por finalidad la asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre las autoridades competentes de las Partes.
2. Las Partes se prestarán asistencia mutua, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio y en estricto cumplimiento de sus respectivos ordenamientos jurídicos, para la investigación de delitos y la cooperación en procesos judiciales relacionados con asuntos penales.
3. El presente Convenio no faculta a las autoridades o a los particulares de la Parte requirente a realizar en territorio de la Parte requerida funciones que, según las leyes internas, estén reservadas a sus autoridades, salvo el caso previsto en el artículo 14, párrafo 3.

4. Este Convenio no se aplicará a la asistencia a particulares o terceros Estados. Sus disposiciones no generarán derecho alguno a favor de los particulares en orden a la obtención, eliminación o exclusión de pruebas o a la obstaculización en el cumplimiento de una solicitud.
5. El presente Convenio no se aplicará:
 - a) La detención de personas con el fin de que sean extraditadas ni a las solicitudes de extradición;
 - b) El traslado de personas condenadas con el objeto que cumplan sentencia penal.

Artículo 2 Doble Incriminación

1. La asistencia se prestará aún cuando el hecho por el cual se procede en, la Parte requirente no sea considerado como delito por la legislación de la Parte requerida.
2. No obstante, se requerirá que dicho hecho constituya delito en la Parte requerida si la asistencia que se solicita consiste en la ejecución de una medida de secuestro de bienes, registro domiciliario, seguimiento de personas, interceptación de correspondencia o intervención de comunicaciones telefónicas, de conformidad a la legislación de cada una de las Partes.

Artículo 3 Alcance de la Asistencia

La asistencia comprenderá:

- a) Notificación de actos procesales;
- b) Recepción y producción de pruebas, tales como testimonios y declaraciones, peritajes e inspecciones de personas, bienes y lugares;
- e) Localización e identificación de personas;
- d) Notificación de personas y peritos para comparecer voluntariamente a fin de prestar declaración o testimonio en la Parte requirente;
- e) Traslado de Personas detenidas a efectos de comparecer como testigos en la Parte requirente o con otros propósitos expresamente indicados en la solicitud, de conformidad con el presente Convenio;
- f) Medidas cautelares sobre bienes;
- g) Cumplimiento de otras solicitudes respecto de bienes, incluyendo la eventual transferencia del valor de los bienes decomisados de manera definitiva;

- h) Entrega de documentos y otros objetos de prueba;
- i) Cualquier otra forma de asistencia de conformidad con los fines de este Convenio, siempre y cuando no sea incompatible con las leyes del Estado requerido.

Artículo 4 Autoridades Centrales

- 1. Las Autoridades Centrales se encargarán de presentar y recibir por comunicación entre ellas las solicitudes a que se refiere el presente Convenio.
- 2. Por la República Argentina la Autoridad Central será el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Por la República de El Salvador la Autoridad Central será el Ministerio de Gobernación.
- 3. La Autoridad Central podrá ser cambiada en cualquier momento debiendo una Parte comunicarlo en el menor tiempo posible a la Otro.

Artículo 5 Autoridades Competentes para la Solicitud de Asistencia

Las solicitudes transmitidas por una Autoridad Central, de conformidad con el presente Convenio, se basarán en los requerimientos de asistencia de las autoridades competentes de la Parte requirente encargados del juzgamiento o investigación de delitos.

Artículo 6 Denegación de la Asistencia

- 1. La Parte requerida podrá denegar la asistencia cuando:
 - a) La solicitud se refiera a un delito tipificado como tal en la legislación militar pero no en legislación penal ordinaria;
 - b) La solicitud se refiera a delitos, que en la Parte Requerida son delitos políticos o conexos con infracciones de este tipo;
 - c) La persona en relación con la cual se solicita la medida haya sido absuelta o haya cumplido su condena en la Parte requerida por el delito mencionado en la solicitud o ésta se haya extinguido;
 - d) El cumplimiento de la solicitud sea contrario a la seguridad, al orden público o a otros intereses esenciales de la Parte requerida;

- e) La solicitud de asistencia sea contraria al ordenamiento jurídico de la Parte requerida o no se ajuste a las disposiciones de este Convenio;
 - f) La investigación haya sido iniciada con el objeto de procesar o discriminar en cualquier forma a una persona o grupo de personas por razones de raza, sexo, condición social, nacionalidad, religión, ideología o cualquier otra forma de discriminación.
2. Si la Parte requerida deniega la asistencia, deberá informarlo a la Parte requirente por intermedio de su Autoridad Central, y las razones en que se funda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.1.b.
3. La autoridad competente de la Parte Requerida podrá denegar, condicionar o diferir el cumplimiento de la solicitud, cuando se considere que obstaculiza un procedimiento penal en curso en su territorio.
4. La prestación de la asistencia solicitada no podrá ser denegada por la existencia del secreto bancario o de instituciones financieras.

Sobre esas condiciones la Parte Requerida consultará a la Parte Requirente por intermedio de las Autoridades Centrales. Si la Parte requirente acepta la asistencia condicionada la solicitud será cumplida de conformidad con la manera propuesta.

5. A los fines del numeral 1), literal b) no se considerarán delitos Políticos:
- a) Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad;
 - b) Los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de personal diplomático o de otras personas internacionalmente protegidas;
 - c) Los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de la población o del personal civil inocente no comprometido en la violencia generada por un conflicto armado;
 - d) Los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de un jefe de Estado o de Gobierno, o de un miembro de su familia;
 - e) Los delitos que atenten contra la seguridad de la aviación o la navegación civil o comercial;
 - f) Los actos de terrorismo.

CAPÍTULO 11
EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES

Artículo 7
Forma y Contenido de la Solicitud

1. La solicitud de asistencia deberá formularse por escrito.
2. La solicitud podrá ser anticipada por fax, correo electrónico u otro medio equivalente, debiendo ser confirmada por documento original y remitida por la Parte requirente dentro de los 10 (diez) días de su formulación.
3. La solicitud deberá contener los siguientes requisitos:
 - a) Identificación de la Autoridad competente de la Parte requirente;
 - b) Descripción del asunto y la naturaleza del procedimiento judicial, incluyendo los delitos a los que se refiere;
 - c) Descripción de las medidas de asistencia solicitadas;
 - d) Motivos por los cuales se solicitan las medidas;
 - e) Transcripción o fotocopia certificada de la legislación aplicable;
 - f) Identidad de personas sujetos a procedimiento judicial, cuando sean conocidas;
 - g) Plazo dentro del cual la Parte requirente desea que la solicitud sea cumplida.
4. Cuando sea necesario, y en la medida de lo posible, la solicitud deberá también incluir:
 - a) Información sobre la identidad y el domicilio de las personas a ser notificadas o citadas y su relación con el proceso;
 - b) La descripción exacta del lugar a inspeccionar y la identificación de la persona sometida a examen, así como los bienes objeto de una medida cautelar o definitiva;
 - c) El texto del interrogatorio a ser formulado para la prueba testimonial en la Parte Requerida, así como la descripción de la forma cómo deberá efectuarse y registrarse cualquier testimonio o declaración,
 - d) La descripción de la forma y, procedimientos especiales en que se deberá cumplir la solicitud; si así fuesen requeridos;

- e) Información sobre el pago de los gastos que se asignarán a la persona, cuya presencia se solicite a la Parte requerida;
- f) La indicación de las autoridades de la Parte requirente que participarán en el proceso que se desarrolla en la Parte requerida;
- g) Cualquier otra información que pueda ser de utilidad a la Parte requerida para facilitar el cumplimiento de la solicitud.

Artículo 8
Ley Aplicable

1. El cumplimiento de las solicitudes se realizará según la ley de la Parte requerida y de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.
2. A petición de la Parte requirente, la Parte requerida cumplirá la asistencia de acuerdo con las formas y procedimientos especiales indicados en la solicitud, a menos que sean incompatibles con su legislación interna.

Artículo 9
Confidencialidad y Limitaciones en el Empleo de la Información

1. La Parte requerida mantendrá bajo reserva la solicitud de asistencia judicial, salvo que su levantamiento sea necesario para ejecutar el requerimiento.
2. Si para el cumplimiento o ejecución del requerimiento fuere necesario el levantamiento de la reserva, la Parte requerida solicitará su aprobación a la Parte requirente, mediante comunicación escrita, sin la cual no se ejecutará la solicitud.
3. La Autoridad competente de la Parte requerida podrá solicitar que la información o prueba obtenida en virtud del presente Convenio tenga carácter confidencial, de conformidad con las condiciones que se especifiquen.

En tal caso, la Parte requirente respetará tales condiciones. Si no puede aceptarlas, notificará a la Parte requerida, que decidirá sobre la solicitud de cooperación.

4. Salvo autorización previa de la Parte requerida, la Parte requirente solamente podrá emplear la información o la prueba obtenida en virtud del presente Convenio en la investigación o procedimiento indicado en la solicitud.

Artículo 10
Información sobre el trámite de la solicitud

1. A solicitud de la Autoridad Central de la Parte requirente, la Autoridad Central de la Parte requerida informará en un plazo razonable sobre el trámite de la solicitud.
2. La Autoridad Central de la Parte requerida informará a la brevedad el resultado del cumplimiento de la solicitud y remitirá toda la información y las pruebas obtenidas a la Autoridad Central de la Parte requirente.
3. Cuando no sea posible cumplir la solicitud, en todo o en parte, la Autoridad Central de la Parte requerida lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central de la Parte requirente e informará las razones por las cuales no fue posible su cumplimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.1.b.

Artículo 11
Gastos

La Parte requerida se encargará de los gastos de diligenciamiento de la solicitud. La Parte requirente pagará los gastos y honorarios correspondientes a los peritos, los gastos extraordinarios consecuencia del empleo de formas o procedimientos especiales y los gastos de viaje de las personas indicadas en los artículos 15 y 16.

CAPÍTULO III
FORMAS DE ASISTENCIA

Artículo 12
Notificaciones

1. La Autoridad Central de la Parte requirente deberá transmitir la solicitud de notificación para que comparezca una persona ante la Autoridad competente de la Parte requirente, con razonable antelación a la fecha prevista para esto.
2. Si la notificación no se realiza deberá informar, por intermedio de las Autoridades Centrales a la Autoridad competente de la Parte requirente las razones por las cuales no se pudo diligenciar.

Artículo 13
Entrega y Devolución de Documentos Oficiales

1. Por solicitud de la Autoridad competente de la Parte Requirente, la Autoridad competente de la Parte requerida:

- a) Proporcionará copia de documentos oficiales, registros o información accesible al público;
 - b) Podrá proporcionar copias de documentos e informaciones a las que no tenga acceso el público, en las mismas condiciones en las cuales esos documentos se pondrían a disposición de sus propias autoridades. Si la asistencia prevista en este párrafo es denegada, la Autoridad competente de la Parte requerida no estará obligada a expresar los motivos de denegación.
2. Los documentos u objetos que hubieran sido enviados en cumplimiento de una solicitud de asistencia judicial, deberán ser devueltos por la Autoridad competente de la Parte requirente, cuando la Parte requerida así lo solicite.

Artículo 14

Asistencia en la Parte Requerida

1. Toda persona que se encuentre en el territorio de la Parte Requerida y a la que se le solicite prestar testimonio o peritaje, presentar documentos, antecedentes o elementos de prueba en virtud de este Convenio, deberá comparecer de conformidad con la legislación de la Parte requerida, ante la Autoridad competente.
2. La Parte requerida informará con suficiente antelación el lugar y la fecha en que se recibirá la declaración testimonial o peritaje, o los documentos mencionados, antecedentes o elementos de prueba. Cuando sea necesario, las Autoridades competentes se consultarán por intermedio de las Autoridades Centrales, para efectos de fijar una fecha conveniente para las Autoridades competentes de la Parte requirente y requerida.
3. La Autoridad competente de la Parte requerida autorizará bajo su dirección, la presencia de las autoridades indicadas en la solicitud durante el cumplimiento de diligencias de cooperación y permitirá formular preguntas si no es contrario a su legislación. La audiencia tendrá lugar según los procedimientos establecidos por la legislación de la Parte requerida.
4. Si la persona referida en el párrafo 1 alega inmunidad, privilegio o incapacidad según la legislación de la Parte requerida, esto será resuelto por la Autoridad competente de la Parte requerida antes del cumplimiento de la solicitud, y se comunicará a la Parte requirente a través de la Autoridad Central.

5. Los documentos, antecedentes y elementos de prueba entregados por los declarantes u obtenidos como resultado de su declaración o en ocasión de la misma, serán enviados a la Parte requirente junto con la declaración.

Artículo 15

Asistencia en la Parte Requirente

1. Cuando la Parte Requirente solicite la presencia de una persona en su territorio para rendir testimonio u ofrecer información o declaración, la Parte requerida notificará al testigo o perito a comparecer ante la Autoridad competente de la Parte Requirente.
2. La Autoridad competente de la Parte Requerida registrará por escrito el consentimiento de una persona cuya presencia es solicitada en la Parte requirente, e informará de inmediato a la Autoridad Central de la Parte requirente sobre la respuesta.
3. Al solicitar que comparezca, la Autoridad Central de la Parte requirente indicará los gastos de traslado y de estadía a su cargo.

Artículo 16

Comparecencia de Personas Sujetas a Procedimiento Penal detenidas

1. Cuando la Parte Requirente solicite la comparecencia personal ante sus autoridades competentes, en calidad de testigo o para otorgar asistencia en investigaciones de una persona detenida en el territorio de la Parte requerida, ésta accederá a ello si el detenido otorga su consentimiento de manera expresa y por escrito y si dicha Parte estima que no existen consideraciones importantes que se opongan al traslado.
2. La Parte requirente mantendrá bajo custodia a la persona trasladada y la entregará a la Parte requerida, dentro del período fijado por ésta, o antes de ello, en la medida en que ya no fuese necesaria su presencia.
3. El tiempo en que la persona estuviera fuera del territorio de la Parte Requerida será computado para la sentencia que haya sido impuesta a la persona trasladada.
4. Cuando la Parte requerida comunique a la Parte requirente que la persona trasladada ya no necesita permanecer detenida, esa persona será puesta en libertad y será sometida al régimen general establecido en el artículo 15 del presente Convenio.
5. La persona detenida que no otorgue su consentimiento para prestar declaración, en los términos de este artículo, no estará sujeta, por esta razón a cualquier sanción ni será sometida a ninguna medida conminatoria.

Artículo 17
Garantía temporal

1. La comparecencia de una persona que consienta en rendir testimonio o prestar asistencia, según lo dispuesto en los artículos 15 y 16, estará condicionada a que la Parte requirente conceda una garantía temporal por la cual ésta no podrá, mientras se encuentra la persona en su territorio:
 - a) Detener o juzgar a la persona por delitos anteriores a la salida del territorio de la Parte requerida;
 - b) Citar a la persona a comparecer o a rendir testimonio en procedimiento diferente al especificado en la solicitud.
2. La garantía temporal cesará cuando la persona prolongue voluntariamente su estadía en el territorio de la Parte requirente, por más de 10 (diez) días, a partir del momento en que su presencia no sea necesaria en ese Estado, de conformidad con lo comunicado a la Parte requerida, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 18
Medidas Cautelares

1. Para los fines del presente Convenio:
 - a) "Producto del delito" significa bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito o su valor equivalente.
 - b) "Instrumento del delito" significa cualquier bien utilizado o destinado a ser utilizado para la comisión de un delito.
2. La Autoridad competente de una Parte, por conducto de las Autoridades Centrales, podrá solicitar la identificación y/o la adopción de medidas cautelares sobre bienes, instrumento o producto de un delito que se encuentren ubicados en el territorio de la Otra Parte. Cuando se trate de la identificación del producto del delito, la Parte requerida informará acerca del resultado de la búsqueda.
3. Una vez identificado el producto del delito, o cuando se trate del instrumento del delito, a solicitud de la Parte requirente, la Parte Requerida, en la medida en que su legislación interna lo permita, adoptará las medidas cautelares correspondientes sobre tales bienes.
4. Un requerimiento efectuado en virtud del párrafo anterior deberá incluir:
 - a) Una copia de la medida cautelar;

- b) Un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del delito, dónde y cuándo se cometió, y una referencia a las disposiciones legales pertinentes;
 - c) Si fuera posible, descripción de los bienes, respecto de los cuales se pretende efectuar la medida y su valor comercial, y la relación de éstos con la persona contra la que se inició;
 - d) Una estimación de la suma a la que se pretende aplicar la medida cautelar y de los fundamentos del cálculo de la misma.
5. La Parte requerida resolverá, según su ley, cualquier solicitud relativa a la protección de derechos de terceros de buena fe sobre los bienes que sean materia de las medidas previstas en los párrafos anteriores.
 6. Las Autoridades competentes de cada una de las Partes informarán con prontitud sobre el ejercicio de cualquier recurso o de una decisión adoptada respecto de la medida cautelar solicitada o adoptada.

Artículo 19 Otras Medidas de Cooperación

Las Partes de conformidad con su legislación interna podrán prestarse cooperación en el cumplimiento de medidas definitivas sobre bienes vinculados a la comisión de un hecho ilícito en cualquiera de las Partes.

Artículo 20 Custodia y Disposición de Bienes

El Estado Parte que tenga bajo su custodia los instrumentos, el objeto o los frutos del delito, dispondrá de los mismos de conformidad con lo establecido en su ley interna. En la medida que lo permitan sus leyes y en los términos que se consideren adecuados, dicho Estado Parte podrá repartir con el otro los bienes decomisados o el producto de su venta.

Artículo 21 Responsabilidad

1. La responsabilidad por daños que pudiera derivarse de los actos de las autoridades de un Estado Parte en la ejecución de este Convenio, será regida por lo dispuesto en la legislación interna de ese Estado Parte.
2. Una de las Partes no será responsable por los daños que puedan resultar de actos de las autoridades de la otra Parte, en la formulación o ejecución de una solicitud, de conformidad con este Convenio.

Artículo 22

Legalización de Documentos y Certificados

Los documentos provenientes de una de las Partes, que deban ser presentados en el territorio de la otra Parte, que se tramiten por intermedio de las Autoridades Centrales no requerirán de legalización o cualquier otra formalidad análoga.

Artículo 23

Solución de Controversias

1. Cualquier controversia que surja de una solicitud, será resuelta por consulta entre las Autoridades Centrales.
2. Cualquier controversia que surja entre las Partes relacionada con la interpretación o aplicación de este Convenio será resuelta por consulta entre las Partes por vía diplomática.

Artículo 24

Información de Sentencias Condenatorias

Las Partes se informarán de las sentencias condenatorias que las autoridades judiciales de una de ellas hayan dictado contra nacionales de la Otra.

Artículo 25

Información de Antecedentes Penales

Cuando una de las Partes solicite a la Otra antecedentes penales de una persona, dichos antecedentes le serán comunicados si no lo prohíbe la legislación interna de la Parte requerida.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 26

Compatibilidad con otros Tratados, Acuerdos u Otras formas de Cooperación

1. La asistencia establecida en el presente Convenio no impedirá que cada una de las Partes preste asistencia a la Otra al amparo de lo previsto en otros instrumentos internacionales vigentes entre ellas.
2. Este Convenio no impedirá a las Partes la posibilidad de desarrollar otras formas de cooperación de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Artículo 27
Entrada en vigor y Duración

1. El presente Convenio estará sujeto a ratificación y entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de canje de los instrumentos de ratificación.
2. El presente Convenio permanecerá en vigor indefinidamente.
3. El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes en cualquier momento. Esa denuncia surtirá efecto ciento ochenta (180) días después de la fecha de su notificación por la otra Parte, por medio de nota diplomática. La denuncia no afectará las solicitudes de asistencia en curso.

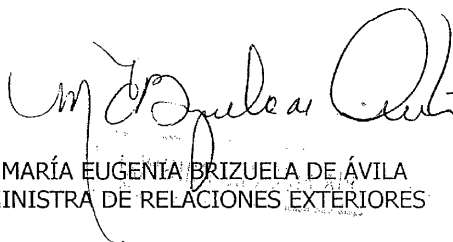
Hecho en San Salvador, el día doce de febrero de dos mil tres, en dos originales.

POR LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR



CARLOS FEDERICO RUCKAUF
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO



MARÍA EUGENIA BRIZUELA DE ÁVILA
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE
REPUBLIC OF EL SALVADOR ON JUDICIAL ASSISTANCE IN
CRIMINAL MATTERS

The Argentine Republic and the Republic of El Salvador, hereinafter referred to as the Parties;

Considering the ties of friendship and cooperation uniting them;

Considering that the fight against crime calls for joint action by States;

Recognizing that the fight against crime is a shared responsibility of the international community;

Aware of the need to strengthen mechanisms for judicial cooperation and mutual assistance to prevent an increase in criminal activities;

Wishing to take action to control and suppress crime in all its manifestations, through coordinated activities and specific programmes;

Respecting the constitutional, legal and administrative norms of their States, as well as the principles of international law, especially sovereignty and territorial integrity, and taking into consideration the recommendations of the United Nations on the subject;

Have agreed as follows:

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

1. The purpose of this Agreement is to provide for mutual judicial assistance in criminal matters between the competent authorities of the Parties.

2. The Parties shall assist each other, in accordance with the provisions of this Agreement and in strict compliance with their respective legal regimes, in investigating crimes and cooperating in legal proceedings relating to criminal matters.

3. This Agreement shall not empower authorities or individuals of the requesting Party to carry out, in the territory of the requested Party, functions which, under domestic law, are reserved for the latter's authorities, except in the case provided for in article 14, paragraph 3.

4. This Agreement shall not apply to assistance to individuals or to third States. Its provisions shall not give rise to a right of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of a request.

5. This Agreement shall not apply to:

(a) The detention of persons with a view to their extradition, or requests for extradition;

(b) The transfer of convicted persons to serve sentences.

Article 2. Double jeopardy

1. Assistance shall be provided even if the act in respect of which proceedings have been instituted in the requesting Party is not considered a crime under the law of the requested Party.

2. However, the act in question must constitute a crime under the law of the requested Party in cases where the assistance requested is for attachment of personal property, house searches, tracking of persons, interception of correspondence or tapping of telephone communications, in accordance with the legislation of each of the Parties.

Article 3. Scope of assistance

Assistance shall include:

- (a) Service of process;
- (b) Receipt and production of evidence, such as testimonies and statements, expert opinions and examinations of persons, property and places;
- (c) Location and identification of persons;
- (d) Notification of persons and experts to appear voluntarily to give statements or testimony in the requesting Party;
- (e) Transfer of persons in custody to appear as witnesses in the requesting Party or for other purposes expressly indicated in the request, in accordance with this Agreement;
- (f) Precautionary measures in respect of property;
- (g) Compliance with other requests concerning property, including the possible final transfer of the value of confiscated property;
- (h) Provision of documents and other evidentiary items;
- (i) Any other form of assistance in accordance with the purposes of this Agreement, provided that it is not incompatible with the laws of the requested State.

Article 4. Central Authorities

1. The Central Authorities shall be responsible for submitting and receiving, through communication between them, the requests referred to in this Agreement.

2. For the Argentine Republic, the Central Authority shall be the Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship. For the Republic of El Salvador, the Central Authority shall be the Ministry of the Interior.

3. The Central Authority may be changed at any time, in which case the changing Party shall inform the other as rapidly as possible.

Article 5. Competent authorities for requests for assistance

Requests transmitted by a Central Authority in accordance with this Agreement shall be based on requests for assistance from competent authorities of the requesting Party responsible for the prosecution or investigation of crimes.

Article 6. Refusal of assistance

1. The requested Party may refuse assistance if:

(a) The request refers to an offence which is characterized as such under military law but not under ordinary criminal law;

(b) The request refers to offences which in the requested Party are political offences or related to offences of that nature;

(c) The person in respect of whom the measure is being requested has been acquitted or has served a sentence in the requested Party for the offence mentioned in the request, or the sentence has been extinguished;

(d) Execution of the request would prejudice the security, public order or other essential interests of the requested Party;

(e) The request for assistance is contrary to the legal regime of the requested Party or is not in conformity with the provisions of this Agreement;

(f) The investigation has been opened for the purpose of prosecuting or discriminating in any way against a person or group of persons on account of race, sex, social status, nationality, religion, ideology or any other form of discrimination.

2. If the requested Party refuses assistance, it shall so inform the requesting Party through its Central Authority and shall state the reasons for the refusal, without prejudice to the provisions of article 13, paragraph 1 (b).

3. The competent authority of the requested Party may refuse, impose conditions on or defer execution of the request if it considers that such execution would interfere with criminal proceedings underway in its territory.

4. Provision of assistance may not be refused on the grounds of banking or financial confidentiality.

In such cases, the requested Party shall consult with the requesting Party through the Central Authorities. If the requesting Party accepts the conditions attached to the assistance, the request shall be executed in the manner proposed.

5. For purposes of paragraph 1 (b), the following shall not be considered political offences:

(a) War crimes and crimes against humanity;

(b) Assaults on the life, bodily integrity or liberty of diplomatic personnel or other internationally protected persons;

(c) Assaults on the life, bodily integrity or liberty of the population or of innocent civilians not implicated in the violence generated by an armed conflict;

(d) Assaults on the life, bodily integrity or liberty of a Head of State of Government, or a member of his or her family;

(e) Offences jeopardizing the safety of civil or commercial aviation or shipping;

(f) Acts of terrorism.

CHAPTER II. EXECUTION OF REQUESTS

Article 7. Form and content of requests

1. Requests for assistance shall be made in writing.
2. Advance copies of requests may be sent by fax, electronic mail or other equivalent medium, and shall be confirmed by the original document and sent by the requesting Party within 10 (ten) days following their formulation.
3. Requests shall include the following:
 - (a) The name of the competent authority of the requesting Party;
 - (b) A description of the subject matter and nature of the judicial proceeding, including the offences to which it relates;
 - (c) A description of the measures of assistance sought;
 - (d) The reasons why such measures are sought;
 - (e) Transcript or certified photocopy of the applicable legislation;
 - (f) The names of the persons being prosecuted, if known;
 - (g) The time-limit within which compliance with the request is desired by the requesting Party.
4. Where necessary, and to the extent possible, the request shall also include:
 - (a) The names and addresses of persons to be served or summoned and their relationship to the proceedings;
 - (b) A precise description of the site to be searched and the name of the person being investigated, as well as the property subject to a precautionary or definitive measure;
 - (c) The text of the questions to be posed in the taking of testimonial evidence in the requested Party and a description of how any testimony or statement is to be taken and recorded;
 - (d) A description of any special means or procedures by which the request is to be executed, if applicable;
 - (e) Information on the payment of the expenses incurred by the person whom the requested Party is asked to make available;
 - (f) The names of the authorities of the requesting Party who will take part in the proceedings conducted in the requested Party;
 - (g) Any other information which may be useful to the requested Party in facilitating execution of the request.

Article 8. Applicable law

1. Requests shall be executed in accordance with the law of the requested Party and in conformity with the provisions of this Agreement.
2. At the request of the requesting Party, the requested Party shall provide the assistance in accordance with any special means or procedures indicated in the request, unless they are incompatible with its domestic laws.

Article 9. Confidentiality and limitations on the use of information

1. The requested Party shall keep the request for judicial assistance confidential unless its disclosure is necessary for the execution of the request.

2. If the confidentiality requirement must be lifted for the purpose of complying with or executing the request, the requested Party shall seek the requesting Party's approval thereof in writing, failing which the request shall not be executed.

3. The competent authority of the requested Party may request that information or evidence obtained by virtue of this Agreement be kept confidential, in accordance with such conditions as may be specified.

In this case, the requesting Party shall observe such conditions. Should it be unable to accept them, it shall so inform the requested Party, which shall decide accordingly on the request for cooperation.

4. The requesting Party may not, without the prior consent of the requested Party, use information or evidence obtained by virtue of this Agreement for purposes other than those of the investigation or proceeding indicated in the request.

Article 10. Information on the processing of requests

1. At the request of the Central Authority of the requesting Party, the Central Authority of the requested Party shall provide information, within a reasonable period, on the processing of the request.

2. The Central Authority of the requested Party shall promptly inform the Central Authority of the requesting Party of the outcome of the execution of the request and shall provide it with all the information and evidence obtained.

3. If the request cannot be executed, in whole or in part, the Central Authority of the requested Party shall so inform the Central Authority of the requesting Party immediately and shall state the reasons why the request could not be executed, without prejudice to the provisions of article 13, paragraph 1 (b).

Article 11. Expenses

The requested Party shall pay the costs of executing the request. The requesting Party shall pay the expenses and fees of experts, extraordinary expenses resulting from the use of special means or procedures and the travel expenses of the persons mentioned in articles 15 and 16.

CHAPTER III. TYPES OF ASSISTANCE

Article 12. Service of process

1. The Central Authority of the requesting Party shall transmit requests for service of summonses to appear before the competent authority of the requesting Party reasonably far in advance of the date scheduled for such appearance.

2. If the summons is not served, the competent authority of the requesting Party shall be informed, through the Central Authorities, of the reasons why service could not be effected.

Article 13. Provision and return of official documents

1. At the request of the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party:

(a) Shall provide copies of official documents, records and information open to public access;

(b) May provide copies of documents and information not open to public access, in the same conditions in which such documents would be provided to its own authorities. If the assistance referred to in this paragraph is refused, the competent authority of the requested Party shall not be obligated to disclose the reasons for the refusal.

2. Documents or property provided in compliance with a request for judicial assistance shall be returned by the competent authority of the requesting Party at the request of the requested Party.

Article 14. Assistance in the requested Party

1. Any person who is in the territory of the requested Party and who is asked to provide testimony or an expert opinion or to present documents, records or items of evidence under this Agreement shall appear, in conformity with the laws of the requested Party, before the competent authority.

2. The requested Party shall inform the person, sufficiently far in advance, of the place and date on which the testimony or expert opinion, or the aforementioned documents, records or items of evidence, will be received. Where necessary, the competent authorities shall consult each other, through the Central Authorities, with a view to setting a date that is convenient for the competent authorities of the requesting and requested Parties.

3. The competent authority of the requested Party shall authorize, under its direction, the presence of the authorities indicated in the request while the cooperation measures are being carried out, and shall allow the formulation of questions, if this is not contrary to its legislation. The interview shall take place according to the procedures established by the laws of the requested Party.

4. If the person referred to in paragraph 1 alleges immunity, privilege or incapacity under the laws of the requested Party, the issue shall be settled by the competent authority of the requested Party prior to the execution of the request, and the outcome shall be communicated to the requesting Party through the Central Authority.

5. Documents, records and items of evidence provided by declarants or obtained as a result of or during their statements shall be provided to the requesting Party together with the statements.

Article 15. Assistance in the requesting Party

1. If the requesting Party requests the presence of a person in its territory to give testimony or provide information or make a statement, the requested Party shall give notification to the declarant or expert to appear before the competent authority of the requesting Party.

2. The competent authority of the requested Party shall record in writing the consent of a person whose presence is requested in the requesting Party and shall immediately communicate the reply to the Central Authority of the requesting Party.

3. In submitting a request for appearance, the Central Authority of the requesting Party shall indicate the travel and subsistence expenses payable by the latter.

Article 16. Appearance of persons in custody

1. If the requesting Party requests the appearance before its competent authorities of a person held in custody in the territory of the requested Party, as a witness or to give assistance in investigations, the requested Party shall grant the request provided that the detainee gives his or her explicit and written consent and provided that the requested Party considers that there are no important considerations standing in the way of such transfer.

2. The requesting Party shall hold the person transferred in custody and shall return the person to the requested Party within the period specified or at such earlier time as the person's presence is no longer required.

3. The time during which the person is outside the territory of the requested Party shall count as part of the sentence imposed upon that person.

4. Where the requested Party advises the requesting Party that the transferred person is no longer required to be held in custody, that person shall be set at liberty and be treated as a person referred to in article 15 of this Agreement.

5. A person in custody who does not consent to make statements pursuant to this article shall not, on that ground, be liable to any penalty or be subjected to any coercive measure.

Article 17. Temporary guarantee

1. The appearance of a person who consents to give testimony or provide assistance under the provisions of articles 15 and 16 shall be contingent upon the provision, by the requesting Party, of a temporary guarantee that it will not, while the person is in its territory:

(a) Detain or prosecute the person for offences that preceded the person's departure from the territory of the requested Party;

(b) Summon the person to appear or to give testimony in a proceeding other than the one to which the request relates.

2. Such temporary guarantee shall cease if the person voluntarily remains in the territory of the requesting Party for more than 10 (ten) days after the State has informed the requested Party that it no longer requires that person's presence, except in cases of force majeure or unforeseeable circumstances.

Article 18. Precautionary measures

1. For the purposes of this Agreement:

(a) "Proceeds of crime" means property of any kind directly or indirectly derived or realized as a result of the commission of an offence, or its equivalent value;

(b) "Instrument of crime" means any property used or intended to be used for the commission of a crime.

2. The competent authority of one Party, through the Central Authorities, may request the identification and/or adoption of precautionary measures in respect of property representing the instrument or proceeds of a crime and situated in the territory of the other Party. When the requested Party is asked to identify the proceeds of a crime, it shall inform the other Party of the outcome of the search.

3. Once the proceeds of crime have been identified, or, in the case of an instrument of crime, at the request of the requesting Party, the requested Party, insofar as its domestic legislation so permits, shall take appropriate precautionary measures in respect of such property.

4. A request submitted under the preceding paragraph shall include:

(a) A copy of the precautionary measure;

(b) A summary of the facts of the case, including a description of the offence, where and when it was committed and references to the relevant legal provisions;

(c) If possible, a description of the property in respect of which the measure is to be implemented, its commercial value and its relation to the person against whom proceedings have been instituted;

(d) An estimate of the amount to which the precautionary measure is to be applied and the basis for the calculation of this amount.

5. The requested Party shall take decisions, according to its laws, on any requests concerning the protection of the rights of bona fide third parties to the property to which the measures referred to in the preceding paragraphs relate.

6. The competent authorities of each Party shall promptly inform each other of the exercise of any appeal or of a decision taken with respect to the precautionary measure requested or adopted.

Article 19. Other cooperation measures

The Parties, in accordance with their domestic laws, may cooperate with each other in applying definitive measures to property linked to the commission of an illicit act in either of the Parties.

Article 20. Custody and disposal of property

The State Party which has in its custody the instruments, object or proceeds of a crime shall dispose of them in accordance with the provisions of its domestic law. Insofar as its laws so permit, and on such terms as may be deemed appropriate, the said State

Party may share with the other any confiscated property or the proceeds from the sale thereof.

Article 21. Liability

1. Liability for any damages resulting from acts of the authorities of one State Party in the execution of this Agreement shall be governed by the domestic laws of that State Party.

2. Neither Party shall be held liable for any damages resulting from acts of the authorities of the other Party in formulating or executing a request in accordance with this Agreement.

Article 22. Authentication of documents and certificates

Documents originating in one of the Parties which are to be submitted in the territory of the other Party and which are processed through the Central Authorities shall not require authentication or any other similar formality.

Article 23. Settlement of disputes

1. Any dispute arising from a request shall be settled by means of consultation between the Central Authorities.

2. Any dispute arising between the Parties in relation to the interpretation or application of this Agreement shall be settled by means of consultation between the Parties through the diplomatic channel.

Article 24. Information on guilty verdicts

The Parties shall inform one another about any guilty verdicts that the judicial authorities of one of them have pronounced against nationals of the other.

Article 25. Information about criminal records

If one of the Parties requests from the other information about a person's criminal record, such information shall be communicated unless this is prohibited by the domestic legislation of the requested Party.

CHAPTER IV. FINAL PROVISIONS

Article 26. Compatibility with other treaties, agreements or other forms of cooperation

1. The assistance provided for in this Agreement shall not prevent either of the Parties from providing assistance to the other under the provisions of other international instruments in force between them.

2. This Agreement shall not prevent the Parties from developing other forms of co-operation in accordance with their respective legal regimes.

Article 27. Entry into force and duration

1. This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force thirty (30) days after the date on which the instruments of ratification are exchanged.

2. This Agreement shall remain in force indefinitely.

3. Either Party may denounce this Agreement at any time. The denunciation shall take effect one hundred and eighty (180) days after the date on which one Party notifies its denunciation, by means of a diplomatic note. Such denunciation shall not affect requests for assistance already being processed.

Done at San Salvador on the twelfth day of February two thousand and three, in two originals.

For the Argentine Republic:
CARLOS FEDERICO RUCKAUF
Minister for Foreign Affairs,
International Trade and Worship

For the Republic of El Salvador:
MARÍA EUGENIA BRIZUELA DE ÁVILA
Minister for Foreign Affairs

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE
D'EL SALVADOR RELATIF À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MA-
TIÈRE PÉNALE

La République argentine et la République d'El Salvador, ci-après dénommées « les Parties »;

Considérant les liens d'amitié et de coopération qui les unissent;

Considérant que la lutte contre la délinquance exige l'action conjointe des États;

Reconnaissant que la lutte contre la délinquance est une responsabilité partagée de la communauté internationale;

Conscientes qu'il est nécessaire de renforcer les mécanismes d'entraide judiciaire et d'assistance mutuelle afin d'éviter l'augmentation des activités délictueuses;

Désireuses de mettre en place des actions de contrôle et de répression des infractions sous toutes leurs formes, moyennant la coordination d'actions et l'exécution de programmes concrets;

En respectant les normes constitutionnelles, juridiques et administratives de leurs États, ainsi que les principes du droit international, particulièrement les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, et en prenant en considération les recommandations des Nations Unies en la matière;

Sont convenues de ce qui suit :

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Champ d'application

1. Le présent Accord a pour but l'entraide judiciaire mutuelle en matière pénale entre les autorités compétentes des Parties.

2. Les Parties s'engagent à s'accorder de l'aide mutuelle, selon les dispositions du présent Accord et en respectant strictement leurs législations respectives, pour l'enquête sur des infractions et l'entraide dans les procédures judiciaires en relation avec des affaires pénales.

3. Le présent Accord ne permet pas aux autorités ni aux particuliers de la Partie requérante d'exercer sur le territoire de la Partie requise des fonctions qui, conformément à sa législation interne, sont réservées à ses autorités, sauf dans le cas prévu à l'article 14, paragraphe 3.

4. Cet Accord ne s'applique pas à l'assistance à des particuliers ou des États tiers. Les dispositions du présent Accord n'engendrent aucun droit en faveur des particuliers à obtenir, éliminer ou exclure des preuves ou à entraver la réalisation d'une demande.

5. Le présent Accord ne s'applique pas :

- a) À la détention de personnes afin qu'elles soient extradées, ni aux demandes d'extradition;
- b) Au transfèrement de personnes condamnées afin qu'elles accomplissent leur jugement pénal.

Article 2. Double incrimination

1. L'entraide est accordée même quand le fait pour lequel une personne est poursuivie dans la Partie requérante n'est pas considéré comme une infraction par la législation de la Partie requise.

2. Néanmoins, si l'assistance requise consiste à exécuter une mesure de réquisition de biens, une perquisition à domicile, le suivi d'une personne, l'interception de la correspondance ou l'écoute des conversations téléphoniques, l'entraide est uniquement accordée si la législation de la Partie requise considère comme une infraction le fait pour lequel la personne est poursuivie dans la Partie requérante, conformément aux dispositions de la législation de chacune des Parties.

Article 3. Portée de l'entraide

L'entraide comprend :

- a) La notification d'actes de procédure;
- b) La réception et la production de preuves, telles que témoignages et déclarations, expertises et fouilles de personnes, biens et lieux;
- c) La localisation et l'identification de personnes;
- d) L'assignation de personnes et d'experts à comparaître volontairement afin de faire une déclaration ou donner un témoignage dans la Partie requérante;
- e) Le transfèrement de personnes détenues aux effets de comparaître en tant que témoins dans la Partie requérante ou dans d'autres buts mentionnés expressément dans la demande, conformément au présent Accord;
- f) Les mesures conservatoires sur des biens;
- g) La réalisation d'autres demandes relatives à des biens, y compris l'éventuel transfert de la valeur des biens saisis de façon définitive;
- h) La remise de documents et autres objets de preuve;
- i) Toute autre forme d'entraide conformément aux fins de cet Accord, à condition qu'elle ne soit pas incompatible avec les lois de l'État requis.

Article 4. Autorités centrales

1. Les Autorités centrales se chargent de présenter et de recevoir, par le biais d'une communication directe entre elles, les demandes auxquelles se réfère le présent Accord.

2. Pour la République argentine, l'Autorité centrale est le Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte. Pour la République d'El Salvador, l'Autorité centrale est le Ministère de la justice.

3. L'Autorité centrale peut changer à tout moment, la Partie concernée devant informer l'autre Partie du changement le plus rapidement possible.

Article 5. Autorités compétentes pour demander l'entraide

Les demandes transmises par une Autorité centrale conformément au présent Accord se baseront sur des requêtes d'entraide des autorités compétentes de la Partie requérante, chargées de la poursuite ou des enquêtes sur les infractions.

Article 6. Refus d'entraide

1. La Partie requise peut refuser l'entraide judiciaire :

a) Si la demande a pour objet des infractions qualifiées comme telles dans la législation militaire mais non dans la législation pénale ordinaire;

b) Si la demande a pour objet une infraction qui, dans la Partie requise, a un caractère politique ou est liée à une infraction analogue;

c) Si la personne pour laquelle on demande la mesure a été acquittée ou a purgé sa peine dans la Partie requise pour l'infraction mentionnée dans la demande, ou s'il y a eu prescription;

d) Si l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise;

e) Si la demande d'entraide est de nature à porter atteinte à la législation de la Partie requise ou ne s'ajuste pas aux dispositions de cet Accord;

f) Si l'enquête a été engagée dans le but de poursuivre ou discriminer sous une forme quelconque une personne ou un groupe de personnes pour des raisons de race, de sexe, de condition sociale, de nationalité, de religion, d'idéologie ou de toute autre forme de discrimination.

2. Si la Partie requise refuse l'entraide, elle doit en informer la Partie requérante par l'intermédiaire de son Autorité centrale et expliquer les raisons sur lesquelles elle se base, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, alinéa b) de l'article 13.

3. L'Autorité compétente de la Partie requise peut refuser, conditionner ou ajourner l'exécution de la demande quand elle considère qu'elle entrave une procédure pénale en cours sur son territoire.

4. La prestation de l'entraide ne pourra être refusée pour des raisons de secret bancaire ou sur demande des institutions financières.

La Partie requise consultera la Partie requérante par l'intermédiaire des Autorités centrales sur ces conditions. Si la Partie requérante accepte l'entraide conditionnée, la demande sera exécutée conformément à la façon proposée.

5. Aux fins du paragraphe 1, alinéa b) ne seront pas considérés comme infractions de nature politique :

a) Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité;

b) Les attentats contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté du personnel diplomatique ou d'autres personnes protégées par un statut international;

- c) Les attentats contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la population ou du personnel civil innocent non impliqué dans les violences générées par un conflit armé;
- d) Les attentats contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'un chef d'État ou de gouvernement, ou de membres de sa famille;
- e) Les infractions commises à l'encontre de la sécurité de l'aviation ou de la navigation civile ou commerciale;
- f) Les actes de terrorisme.

CHAPITRE II. EXÉCUTION DES DEMANDES

Article 7. Forme et contenu de la demande

1. La demande d'entraide doit être formulée par écrit.
2. La demande peut être envoyée à l'avance par fax, courrier électronique ou tout autre moyen équivalent, et elle doit être confirmée par un document original signé par la Partie requérante dans les 10 (dix) jours suivants sa formulation.
3. La demande doit contenir les éléments suivants :
 - a) Identification de l'Autorité compétente de la Partie requérante;
 - b) Description de l'affaire et de la nature de la procédure judiciaire, y compris les infractions auxquelles elle se réfère;
 - c) Description des mesures d'entraide demandées;
 - d) Motifs pour lesquels les mesures sont demandées;
 - e) Transcription ou photocopie certifiée de la législation applicable;
 - f) Identité des personnes faisant l'objet d'une procédure judiciaire, quand on la connaît;
 - g) Délai pendant lequel la Partie requérante souhaite que la demande soit exécutée.
4. En cas de nécessité, et dans la mesure du possible, la demande doit également inclure :
 - a) Des renseignements sur l'identité et le domicile des personnes à notifier ou assigner et leur relation avec la procédure;
 - b) La description exacte du lieu à perquisitionner et l'identification de la personne soumise à examen, ainsi que les biens objets d'une mesure conservatoire ou définitive;
 - c) Le texte de l'interrogatoire à formuler pour la réalisation de la preuve testimoniale dans la Partie requise ainsi que la description de la façon dont le témoignage ou la déclaration doivent être effectués et enregistrés;
 - d) La description de la forme et les procédures spéciales conformément auxquelles la procédure doit être exécutée, le cas échéant;
 - e) Des renseignements sur le remboursement des frais qui sont assignés à la personne dont la présence est demandée à la Partie requise;
 - f) La désignation des autorités de la Partie requérante qui participent à la procédure qui se déroule dans la Partie requise;

g) Toute autre information pouvant être utile à la Partie requise pour faciliter l'exécution de la demande.

Article 8. Législation applicable

1. L'exécution des demandes est réalisée conformément à la législation de la Partie requise et conformément aux dispositions du présent Accord.

2. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise exécute l'entraide conformément aux formes et procédures spéciales indiquées dans la demande, à moins qu'elles ne soient incompatibles avec les dispositions de sa législation interne.

Article 9. Caractère confidentiel et limitations de l'emploi des informations

1. La Partie requise maintiendra sous secret la demande d'entraide judiciaire, sauf si sa levée est nécessaire pour exécuter la requête.

2. Si, pour la réalisation ou l'exécution de la requête, il était nécessaire de lever le secret, la Partie requise demandera l'approbation de la Partie requérante, moyennant communication écrite, sans laquelle la demande ne sera pas exécutée.

3. L'Autorité compétente de la Partie requise peut demander que les informations ou les preuves obtenues en vertu du présent Accord soient confidentielles, conformément aux conditions qui seront spécifiées.

Dans ce cas, la Partie requérante respectera ces conditions. Si elle ne peut pas les accepter, elle en informera la Partie requise qui prendra une décision quant à la demande d'entraide.

4. Sauf autorisation préalable de la Partie requise, la Partie requérante emploiera les informations ou les preuves obtenues en vertu du présent Accord uniquement dans l'enquête ou la procédure indiquée dans la demande.

Article 10. Information sur la procédure suivie par la demande

1. Sur demande de l'Autorité centrale de la Partie requérante, l'Autorité centrale de la Partie requise donnera des renseignements, dans un délai raisonnable, sur la procédure suivie par la demande.

2. L'Autorité centrale de la Partie requise donnera des renseignements rapidement sur le résultat de l'exécution de la demande et fournira toutes les informations et preuves obtenues à l'Autorité centrale de la Partie requérante.

3. Quand il n'est pas possible d'exécuter la demande, entièrement ou partiellement, l'Autorité centrale de la Partie requise en informera immédiatement l'Autorité centrale de la Partie requérante et donnera les raisons pour lesquelles l'exécution n'a pas été possible, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, alinéa b) de l'article 13.

Article 11. Frais

La Partie requise se chargera des frais de procédure de la demande. La Partie requérante payera les frais et honoraires correspondant aux experts, les frais extraordinaires

qui découlent de formes ou procédures spéciales et les frais de voyage des personnes indiquées aux articles 15 et 16.

CHAPITRE III. FORMES D'ENTRAIDE

Article 12. Notifications

1. L'Autorité centrale de la Partie requérante devra transmettre la demande de notification pour qu'une personne compareisse devant l'Autorité compétente de la Partie requérante, dans un délai raisonnable préalable à la date prévue pour ce faire.

2. Si la notification n'est pas réalisée, la Partie requérante devra indiquer à l'Autorité compétente de la Partie requise, par l'intermédiaire de ses Autorités centrales, les raisons pour lesquelles cela n'a pas pu être exécuté.

Article 13. Remise et renvoi de documents officiels

1. Suite à une demande de l'Autorité compétente de la Partie requérante, l'Autorité compétente de la Partie requis :

a) Fournira une copie des documents officiels, registres et informations accessibles au public;

b) Fournira des copies de documents et des informations non accessibles au public, dans les mêmes conditions que celles où ces documents seraient mis à la disposition de ses propres autorités. Si l'entraide prévue dans ce paragraphe est refusée, l'Autorité compétente de la Partie requise ne sera pas tenue d'exposer les motifs du refus.

2. Les documents ou objets qui auraient été envoyés pour exécuter une demande d'entraide judiciaire seront retournés par l'Autorité compétente de la Partie requérante, sur demande de la Partie requise.

Article 14. Entraide dans la Partie requise

1. Toute personne qui se trouve sur le territoire de la Partie requise et qui doit produire un témoignage ou faire une expertise, présenter des documents, des casiers ou des éléments de preuve en vertu de cet Accord, devra comparaître conformément à la législation de la Partie requise, devant l'Autorité compétente.

2. La Partie requise informera dans un délai suffisant du lieu et de la date où elle prendra la déclaration testimoniale ou l'expertise, les documents indiqués, les casiers ou les éléments de preuve. S'il y a lieu, les Autorités compétentes se consulteront par l'intermédiaire des Autorités centrales, afin de fixer une date convenant aux Autorités compétentes des deux Parties.

3. L'Autorité compétente de la Partie requise autorisera, sous sa direction, la présence des autorités indiquées dans la demande pendant l'exécution des opérations d'entraide et leur permettra de formuler des questions si cela ne va pas à l'encontre de sa législation. L'audience aura lieu selon les procédures établies par la législation de la Partie requise.

4. Si la personne mentionnée au paragraphe 1 allègue l'immunité, un privilège ou une incapacité conformément à la législation de la Partie requise, la question sera résolue par l'Autorité compétente de la Partie requise avant l'exécution de la demande et cela sera communiqué à la Partie requérante par l'intermédiaire de l'Autorité centrale.

5. Les documents, casiers et éléments de preuve remis par les déclarants ou obtenus suite à leur déposition ou à l'occasion de celle-ci, seront envoyés à la Partie requérante avec la déposition.

Article 15. Entraide dans la Partie requérante

1. Quand la Partie requérante réclame la présence d'une personne sur son territoire pour apporter un témoignage, fournir des renseignements ou faire une déposition, la Partie requise invite le témoin ou l'expert à comparaître devant l'Autorité compétente de la Partie requérante.

2. L'Autorité compétente de la Partie requise recueillera par écrit le consentement d'une personne dont la présence est réclamée dans la Partie requérante et informera immédiatement l'Autorité centrale de la Partie requérante de la réponse.

3. En demandant qu'elle compare, l'Autorité centrale de la Partie requérante indiquera quels sont les frais de transfèrement et de séjour à sa charge.

Article 16. Comparution de personnes détenues faisant l'objet d'une procédure pénale

1. Lorsque la Partie requérante demande la comparution devant ses Autorités compétentes d'une personne détenue sur le territoire de la Partie requise, en qualité de témoin ou afin qu'elle apporte une aide dans les enquêtes, la Partie requise accède à la demande si la personne détenue exprime son consentement exprès et par écrit et à condition que ladite Partie estime qu'il n'existe pas de considérations importantes empêchant le transfèrement.

2. La Partie requérante maintiendra la personne transférée sous sa garde et la remettra à la Partie requise pendant la période établie par cette dernière, ou avant, dans la mesure où sa présence n'est plus nécessaire.

3. La période de temps pendant laquelle la personne se trouve hors du territoire de la Partie requise sera décomptée aux effets de la sentence ayant été imposée à la personne transférée.

4. Quand la Partie requise communique à la Partie requérante que la personne transférée ne doit plus être en situation de détention, cette personne sera remise en liberté et assujettie au régime général établi à l'article 15 du présent Accord.

5. La personne détenue qui ne donne pas son consentement pour faire des déclarations conformément aux termes de cet article ne fera l'objet, pour cette raison, d'aucune sanction et ne sera soumise à aucune mesure comminatoire.

Article 17. Garantie temporaire

1. La comparution d'une personne qui consent à apporter un témoignage ou son aide, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, sera conditionnée au fait que la Par-

tie requérante octroie une garantie temporaire conformément à laquelle celle-ci ne pourra pas, tant que la personne se trouve sur son territoire :

a) Détenir ou juger la personne pour des infractions antérieures à la sortie du territoire de la Partie requise;

a) Citer la personne à comparaître ou à apporter son témoignage dans une procédure différente de celle apparaissant dans la demande.

2. La garantie temporaire prend fin quand la personne prolonge volontairement son séjour sur le territoire de la Partie requérante pour plus de 10 (dix) jours, à partir du moment où sa présence dans cet État n'est plus nécessaire, conformément à ce qui est communiqué à la Partie requise, sauf dans des circonstances de force majeure ou cas fortuit.

Article 18. Mesures conservatoires

1. Aux fins du présent Accord :

a) « Produit de l'infraction » signifie des biens de toute nature découlant ou obtenus directement ou indirectement suite à la perpétration d'une infraction ou leur valeur équivalente.

b) « Instrument de l'infraction » signifie tout bien utilisé ou destiné à être utilisé pour commettre une infraction.

2. L'Autorité compétente d'une Partie, par l'intermédiaire des Autorités centrales, peut demander l'identification et/ou l'adoption de mesures conservatoires sur des biens, instruments ou produits d'une infraction, qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie. Quand il s'agit de l'identification du produit de l'infraction, la Partie requise informera du résultat de la recherche.

3. Une fois le produit de l'infraction identifiée, ou quand il s'agit de l'instrument de l'infraction, à la demande de la Partie requérante, la Partie requise, dans la mesure où sa législation interne le permet, prendra les mesures conservatoires correspondantes concernant ces biens.

4. Une requête effectuée en vertu du paragraphe antérieur doit inclure :

a) Une copie de la mesure conservatoire;

b) Un résumé des faits de l'affaire, y compris une description de l'infraction, où et quand elle a été commise et une référence aux dispositions juridiques pertinentes;

c) Si possible, une description des biens pour lesquels on veut prendre la mesure et leur valeur commerciale, la liste de ceux-ci et leur relation avec la personne contre laquelle la mesure a été prise;

d) Une évaluation de la somme à laquelle on veut appliquer la mesure conservatoire et des bases du calcul de celle-ci.

5. La Partie requise prendra une décision, conformément à sa législation, concernant toute demande relative à la protection du droit des tiers de bonne foi sur les biens qui font l'objet des mesures prévues dans les paragraphes antérieurs.

6. Les Autorités compétentes de chacune des Parties informeront rapidement de l'introduction de tout recours ou de décision adoptée concernant la mesure conservatoire demandée ou adoptée.

Article 19. Autres mesures de coopération

Les Parties, conformément à leur législation interne, pourront se prêter leur coopération pour la réalisation de mesures définitives sur des biens liés à la perpétration d'un fait illicite dans l'une quelconque des Parties.

Article 20. Garde et disposition des biens

L'État Partie qui a sous sa garde les instruments, l'objet ou les fruits de l'infraction, disposera de ceux-ci conformément à ce qui est établi dans sa législation interne. Dans la mesure où ses lois le permettent et dans les termes qui sont considérés adéquats, ledit État Partie pourra partager avec l'autre les biens saisis ou le produit de leur vente.

Article 21. Responsabilité

1. La responsabilité pour des dommages qui pourraient découler des actes des autorités de l'une des Parties pendant l'exécution de cet Accord sera régie par les dispositions de la législation interne de cette Partie.

2. L'une des Parties ne sera pas responsable des dommages qui pourraient résulter d'actes des autorités de l'autre Partie, pendant la formulation ou l'exécution d'une demande, conformément à cet Accord.

Article 22. Légalisation de documents et certificats

Les documents provenant de l'une des Parties, qui doivent être présentés sur le territoire de l'autre Partie et qui sont gérés par l'intermédiaire des Autorités centrales, n'auront pas besoin de légalisation ni d'aucune autre formalité analogue.

Article 23. Règlement des différends

1. Tout différend pouvant surgir en raison d'une demande sera réglé par consultation entre les Autorités centrales.

2. Tout différend surgissant entre les Parties relatif à l'interprétation ou à l'application de cet Accord sera réglé par consultation entre les Parties, par la voie diplomatique.

Article 24. Information concernant les sentences exécutoires

Les Parties s'informent mutuellement des sentences exécutoires prononcées par les autorités judiciaires de l'une d'entre elles à l'encontre de ressortissants de l'autre Partie.

Article 25. Information concernant le casier judiciaire

Lorsque l'une des Parties demande à l'autre le casier judiciaire d'une personne, ledit casier lui sera communiqué si les dispositions de la législation interne de la Partie requise le permettent.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 26. Compatibilité avec d'autres traités, accords ou autres formes d'entraide

1. L'entraide établie dans le présent Accord n'empêche pas que chacune des Parties apporte son aide à l'autre conformément à ce qui est prévu dans d'autres instruments internationaux en vigueur entre elles.

2. Cet Accord n'empêchera pas les Parties de développer d'autres formes d'entraide conformément à leurs législations respectives.

Article 27. Entrée en vigueur et durée

1. Le présent Accord sera soumis à ratification et entrera en vigueur trente (30) jours après la date de l'échange des instruments de ratification.

2. Le présent Accord aura une durée indéfinie.

3. Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment. Cette dénonciation prendra effet cent quatre-vingts (180) jours après la date de sa notification par l'autre Partie, par la voie diplomatique. La dénonciation n'affectera pas les demandes d'entraide en cours.

Signé à San Salvador, le douze février de l'an deux mille trois, en deux exemplaires originaux.

Pour la République argentine :

CARLOS FEDERICO RUCKAUF

Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte

Pour la République d'El Salvador :

MARÍA EUGENIA BRIZUELA DE ÁVILA

Ministre des relations extérieures